

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO No:	11001-33-35-029-2021-00131-00
DEMANDANTE:	MARÍA DEOFIR LEÓN SÁNCHEZ
DEMANDADO:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL
CONTROVERSIA:	EJECUTIVO

Se observa que la apoderada de la parte ejecutante, mediante memorial allegado el 24 de noviembre de 2022, solicita al despacho que se decreten las siguientes medidas cautelares:

“(…) solicito se decrete el embargo y la retención de dineros que el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional posean en las siguientes entidades bancarias: Bancolombia, Davivienda, BVVA, Bogotá, Occidente, Popular, AV Villas, las cuales bajo la gravedad del juramento denuncio de su propiedad.

*El Nit del Ministerio de Defensa es 899.999.003-1
El Nit del Ejército Nacional es: 800.130.635-4*

Fundamento jurídico de la solicitud:

En principio los recursos que maneja el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional son inembargables por estar incorporados al presupuesto nacional.

Dicha regla tiene sus excepciones consagradas a nivel jurisprudencial para el pago de obligaciones laborales, sentencias y conciliaciones y títulos provenientes del Estado.

La sentencia base de la ejecución ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del cónyuge de la demandante.

Por tratarse de una obligación de carácter laboral el embargo recae sobre cualquier cuenta con independencia de su denominación. Así lo estableció la Corte Constitucional en sentencia C-546 de 1992 en la declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de que "en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será

embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.”

Ahora bien, cabe precisar que el artículo 594 del CGP prohibió expresamente la embargabilidad de los bienes y recursos estatales a saber:

“ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. *Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:*

- 1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.*

(...)

PARÁGRAFO. *Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.*

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho de no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene”.

Así las cosas, siguiendo la providencia del consejo de estado^{1,2}; referida a las reglas de vigencia del C.G.P, en ocasión con la remisión normativa de los artículos 306, 308 y 309 del CPACA a partir del 25 de junio de 2014, resulta improcedente decretar medidas de embargo. Lo anterior atendiendo que no se encuentra fundamento legal que autorice el embargo de los bienes y recursos de propiedad de la entidad ejecutada, tal como lo exige el parágrafo del artículo 594 del C.G.P, lo cual, por mandato expreso del inciso primero de la norma en cita son **inembargables**.

La anterior posición argumentativa, encuentra sustento en la providencia del Consejo de Estado en donde indicó:

“(…)

No obstante, lo anterior en desarrollo de los principios constitucionales, el decreto de 2008 y el artículo 549.1 del código general del proceso se concluye que los recursos de la seguridad social no se pueden embargar
(…)

Así las cosas, el decreto de medidas cautelares solicitadas sobre recursos de la parte demandada, no son procedentes, ya que, son dineros de destinación específica que por mandato legal son inembargables.

En consecuencia, se denegará la medida cautelar del embargo solicitada por el apoderado de la parte ejecutante, dado que las medidas solicitadas recaen sobre *“los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social...”*, inembargables por mandato legal.

De otra parte, **se le acepta la renuncia del poder** solicitada por la doctora Gilma Shirley Díaz Fajardo, mediante memorial enviado al correo de correspondencia Sede Judicial CAN el 09 de diciembre de 2022.

¹Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Subsección “C”, consejero ponente: **Enrique Gil Botero**: Auto interlocutorio del 6 de agosto 2014, Radicación número: 88001-23-33-000-2014-00003-01 (50408). Actor: Sociedad BEMOR S.A.S., Demandado: Archipiélago de San Andres. Providencia y Santa Catalina.

² Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo Consejero ponente: **Enrique Gil Botero. Sentencia de 25 de junio de 2014**, Radicación número:25000-23-36-000-2012-00395-01 (49299).

Por lo anteriormente expuesto, el Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de medida cautelar de embargo presentada por la apoderada de la parte ejecutante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

RYGH

JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy 10 de febrero de 2023 a las 8:00 a.m.

PARTES	CORREO ELECTRÓNICO
APODERADO DEMANDANTE:	ro.co.me@hotmail.com
APODERADO M DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL	notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co gilma.diaz@mindefensa.gov.co shirdifa@hotmail.com
MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADOR 191 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	procjudadm191@procuraduria.gov.co